



DOCUMENTOS DE DEBATE - Nº 1

La Izquierda Latinoamericana gobierno y proyecto de cambio



Beatriz Stolowicz

TRANSNATIONAL
INSTITUTE

TNI BRIEFING SERIES
No 2004/1

FIM



Fundación de
Investigaciones
Marxistas

DISEÑO

Jan Abraham Vos,
Zlatan Peric, MEDIO

COORDINACION

Daniel Chavez
Project Manager
Transnational Institute
Paulus Potterstraat 20
1071 DA Amsterdam
The Netherlands
Tel: -31-20-6626608
Fax: -31-20-6757176
chavez@tni.org

Beatriz Stolowicz, socióloga mexicana con amplia experiencia personal y profesional en y sobre la izquierda latinoamericana, es profesora-investigadora en el área de América Latina del Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco. Stolowicz ha publicado diversos artículos y libros sobre los impactos de las políticas neoliberales, partidos políticos, movimientos sociales, democracia y 'gobernabilidad', incluyendo *Gobiernos de izquierda en América Latina. El desafío del cambio* (México D.F., Plaza y Valdés/UAM-X, 1999). Este documento es la versión preliminar de un capítulo del libro a ser editado en marzo de 2004, *The Left in the City*, coordinado por Daniel Chavez y Benjamin Goldfrank (Londres, Latin America Bureau/TNI).

T

N

I

Los contenidos de este folleto pueden ser citados o reproducidos con total libertad, siempre que la fuente de información sea mencionada. El TNI y la FIM agradecerían recibir una copia del texto en el que este documento sea usado o citado

Los interesados en publicaciones similares y en las actividades del TNI en general pueden mantenerse informados suscribiéndose al boletín electrónico (en inglés) quincenal del Transnational Institute escribiendo a tni@tni.org

**Amsterdam y Madrid
Enero 2004**

F I M



**Fundación de
Investigaciones
Marxistas**

Fundación de Investigaciones Marxistas
Alameda, 5 2º izda.
28014 Madrid. España.
Tel. +34 914 201 388
Fax. + 34 914 202 004
correo electrónico fim@nodo50.org

UNA NUEVA REALIDAD LATINOAMERICANA

En América Latina ingresamos en una coyuntura política nueva. En 1997, más de 60 millones de latinoamericanos vivían en municipios gobernados por la izquierda. En 2003, son más de 200 millones, con dos gobiernos nacionales además de Cuba: Venezuela desde 1999 y Brasil desde 2003.

La fuerza electoral ganada por la izquierda es un indicador relevante del momento político nuevo, pero no lo expresa ni lo explica suficientemente, y hasta podría conducir a conclusiones equivocadas. Entre ellas, suponer que la fuerza electoral de la izquierda signifique por sí misma un retroceso absoluto de las fuerzas conservadoras en América Latina. El entusiasmo y las esperanzas que justificadamente motiva este signo de avance de las fuerzas democráticas no puede hacernos perder de vista la complejidad del proceso político en nuestro subcontinente.

En la nueva coyuntura, los avances electorales de la izquierda expresan una realidad social y política nueva, definida primordialmente por el ascenso de las luchas populares, por una creciente recomposición de la capacidad de resistencia al neoliberalismo. En ocasiones, llega a manifestarse en levantamientos populares que han podido frenar privatizaciones y otras políticas antipopulares, han hecho caer presidentes y en algunos casos han sido el antecedente inmediato de triunfos electorales. Sin embargo, este panorama amplio y diverso de luchas no siempre tienen una expresión electoral correlativa, y tampoco están necesariamente vinculados a los partidos de izquierda que participan en los procesos electorales.

En enero del 2000, un levantamiento popular en Ecuador destituye al presidente Jamil Mahuad. En abril de 2000, un levantamiento popular en Cochabamba (Bolivia), frena la privatización del agua. En febrero de 2001 es la Marcha de la Dignidad convocada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México, que moviliza a millones. En diciembre de 2001, un levantamiento popular en Argentina hace caer al presidente Fernando de la Rúa y a tres presidentes más en 15 días, y se mantiene por más de siete meses ocupando las calles. En abril de 2002 la resistencia del pueblo venezolano conjura un golpe de Estado, lo que vuelve a ocurrir entre diciembre del 2002 y febrero de 2003 frente al paro patronal golpista. En mayo de 2002 inicia una movilización nacional en Bolivia que se mantiene ininterrumpidamente hasta febrero de 2003, haciendo retroceder decisiones económicas antipopulares del gobierno y demanda una Asamblea Nacional Constituyente (estas movilizaciones dan la base electoral del casi triunfo de Evo Morales en ese año). En junio de 2002, un levantamiento popular en Arequipa (Perú), frena la privatización eléctrica; en ese mismo mes, un levantamiento popular en Paraguay frena la privatización de teléfonos, electricidad, agua, alcantarillado, ferrocarriles e impide la aprobación de una Ley Antiterrorista. En agosto de 2002 los campesinos ejidatarios de San Salvador Atenco (México), impiden la construcción transnacional de un mega aeropuerto y obligan a dejar sin efecto la expropiación de sus tierras. En agosto de 2002, médicos y trabajadores del Seguro Social de El Salvador inician una huelga de siete meses que frena la privatización de esos servicios. En Brasil, en septiembre de 2002 se hace un plebiscito popular contra el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), en el que participan 10 millones, un mes antes de las elecciones presidenciales. En Colombia, en medio de la guerra intensificada por el Plan Colombia, se hace una huelga general el 16 de septiembre de 2002; y en octubre de 2003, los colombianos derrotan un referéndum impuesto por el presidente Álvaro



F I M

Uribe. En Vieques (Puerto Rico), tras años de resistencia, logran en abril de 2003 que salga la Marina de Estados Unidos de su isla. Y entre febrero y octubre de 2003, un levantamiento del pueblo boliviano (la *Guerra del gas*), no sólo frenó su desnacionalización, sino que obligó al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada a renunciar. Estos son sólo algunos ejemplos notorios, pero hay muchas luchas más en todos los países.

Hablar de la izquierda latinoamericana siempre conlleva riesgos de generalizaciones que hacen perder de vista las especificidades de cada actor político, las condiciones históricas de su constitución e identidades, las alteridades sociales y políticas que lo definen y las circunstancias concretas en que actúa. Cuando hablamos de partidos, a esos rasgos específicos hay que agregar diferencias en sus definiciones ideológicas, en el grado de organicidad y homogeneidad que poseen, en el vínculo y arraigo que tienen entre los sectores sociales que buscan representar; o en el nivel de elaboración y desarrollo que tienen sus proyectos políticos.

Hoy en día, además, el vasto campo de la izquierda latinoamericana ya no puede analizarse con las habituales referencias a los partidos de mayor consolidación o mayor tradición. Si incluimos en la izquierda a quienes luchan contra la explotación, la marginación y el saqueo de las riquezas nacionales por el gran capital transnacional, observamos que es más amplio y diverso que aquellos partidos, aunque coincidan en términos generales en los objetivos. Desde mediados de la década de los noventa han surgido nuevas organizaciones de izquierda que tienen importante incidencia política. Algunas no participan en el sistema representativo, como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional de México. Otras organizaciones de más reciente formación disputan los gobiernos estatales y nacionales a la derecha, pero nacen también de movimientos sociales específicos, desde los cuales amplían la representación popular sin perder las identidades originarias. Es el caso de Pachakutik, que se constituye en 1995 como el instrumento político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y que participó en el gobierno presidido por Lucio Gutiérrez. El Movimiento al Socialismo boliviano (1998), cuya raíz es el movimiento indígena -campesino y minero-, que llevó al indígena aymará Evo Morales a disputar la presidencia en 2002. Es el caso del Bloque Social Alternativo, que en el 2000 eligió como gobernador del Departamento del Cauca en Colombia al indígena guambio Floro Tunubalá, y que nació en 1999 a partir de una alianza de organizaciones indígenas y campesinas con sindicatos, estudiantes, pobladores y partidos de izquierda, en el contexto de una huelga general regional de 26 días. También el Movimiento V República con que ganó las elecciones Hugo Chávez en 1998 tiene su origen en una alianza heterogénea entre sectores militares y diversos grupos de izquierda unidos por el objetivo común de enfrentar al bipartidismo tradicional que gobernó Venezuela desde 1958, a la que adhirieron amplias franjas populares.

El accionar político de izquierda es mucho más vasto que la disputa electoral. Pero ésta tiene hoy una gran vitalidad, pues nunca como ahora la izquierda tuvo mayores posibilidades de disputarle gobiernos a la derecha, dado el desprestigio que ésta tiene por la amplitud del rechazo al neoliberalismo. Sin embargo, la probabilidad de convertir esos avances electorales en posibilidades de cambio de la realidad latinoamericana actual no se reduce a tener numerosas representaciones parlamentarias o ganar gobiernos municipales y hasta nacionales. Éstos también dependen

T
N
I

FIM

de la gestación de una fuerza política suficiente, es decir, de una voluntad colectiva organizada capaz de cambiar las relaciones de poder con las que el capitalismo neoliberal se reproduce en todos los ámbitos de la vida social.

Porque el neoliberalismo no es solamente un conjunto de políticas económicas y sociales llevadas a cabo por administraciones gubernamentales conservadoras. Es el poder avasallador del capital sobre el trabajo, que se impuso destruyendo la fuerza social y política relativa de los dominados, mediante la liquidación violenta de su capacidad de resistencia a la explotación y la dominación, la destrucción sistemática de sus organizaciones y su dispersión como sujetos colectivos. Las dictaduras fueron el inicio más violento de esta modificación del poder relativo entre dominantes y dominados a favor de los primeros, pero fue bajo los regímenes representativos que ese proceso se profundizó radicalmente. La década de los noventa, bajo *democracias*, es en la que se lleva a cabo la mayor expropiación del trabajo en la historia moderna de América Latina, al interior de cada país y desde los centros del poder capitalista mundial.

Tras las frías cifras de la estadística está la impunidad de un capitalismo depredador de vidas y países, que no es fruto de un proceso *espontáneo* o *metafísico*, sino el resultado concreto de este cambio en la correlación de fuerzas sociales y políticas. Ese es el significado de que la pobreza alcance hoy, en promedio, a más de un 60 por ciento de la población latinoamericana, de la cual más de la mitad se encuentra en pobreza extrema. Pero la pobreza es la contracara del enriquecimiento de las poderosas minorías capitalistas en cada país: la concentración del ingreso ha sido un proceso sostenido en las últimas dos décadas, llegando en 1999 (también en el promedio regional y según cifras oficiales), a que el 40 por ciento de la población más pobre tiene el 15 por ciento del ingreso total, mientras que el 10 por ciento más rico tiene cerca del 40 por ciento del ingreso total. A ello hay que agregar lo que América Latina transfirió a los centros capitalistas del *primer mundo*: solamente por deuda externa, entre 1992 y 2001, salieron de América Latina más de 1.221 billones de dólares (1,22 billones en términos latinoamericanos, como millón de millones); no obstante lo cual, la deuda externa se duplicó en igual período (1972:378). Sólo en 2001, por cada dólar que recibió de los países ricos para ‘disminuir’ la pobreza, América Latina les devolvió más de 6 dólares. Esto lo pagan los pobres, porque los ricos no pagan impuestos.

Lo más grave de este saqueo interno y externo ocurre a pesar de que en varios países la izquierda tiene importantes representaciones parlamentarias e incluso gobierna en capitales nacionales y estatales y en varios municipios más. El hecho concreto es que, en la década en que gobierna la izquierda, en esos países empeora la situación económica y social de la mayoría de sus poblaciones, a pesar de los importantes y muy destacados esfuerzos de estos gobiernos de izquierda por mejorar la calidad de vida de la población.

Este es un dato duro a considerar sobre la fuerza política que posee la izquierda, y la que necesita generar más allá de los votos que ha conquistado, para hacer retroceder la explotación de las mayorías populares a las que busca representar políticamente. No se trata sólo de que hasta hace muy poco tiempo la izquierda gobernó en municipios con limitadas esferas de competencia económica. Es igualmente válido para gobiernos nacionales, pues el capital domina también por fuera



FIM

del gobierno: el ejemplo de Venezuela es suficientemente ilustrativo del clásico problema teórico sobre la diferencia que existe entre gobierno y Estado, por un lado, y entre Estado y poder, por otro.

Esta lacerante realidad a transformar da la medida de los desafíos y responsabilidades que tiene hoy la izquierda latinoamericana. Esto no siempre está claro en los análisis de la propia izquierda, que suelen ser autorreferidos. Habitualmente evalúa los logros en comparación con su situación previa. Todo logro por sí mismo siempre es un hecho positivo que involucra enormes esfuerzos y sacrificios que deben valorarse. Pero si no se mide el desempeño propio en función de los cambios necesarios, ello puede conducir a eludir las responsabilidades, o bien a obstaculizar la construcción de una estrategia de cambio, entendida como un proceso de gestación de las herramientas y condiciones políticas para poder seguir dando pasos hacia delante. A mediano y largo plazo, lo primero puede producir frustración entre quienes buscan en la izquierda un medio para cambiar el orden social; y lo segundo puede conducir a fracasos, incluso de aquellas experiencias enormemente ricas y prometedoras, pero que se agotan en su carencia de fuerza para llevarlas a cabo.

T

N

I

FIM

Estos riesgos están siempre multiplicados por el hecho de que la izquierda no actúa sola. Lo hace frente a una derecha latinoamericana que ha demostrado una gran capacidad de iniciativa política e ideológica para encarar la crisis capitalista y las circunstancias de crisis de dominación que enfrenta con mayor o menor intensidad en todos los países; que ha demostrado eficacia para hacer funcional a sus objetivos las debilidades teóricas y políticas de la izquierda, e incluso hasta sus mismos logros. Y es que una clave de la política es entenderla como un proceso relacional, en el que todos y cada uno de los actores sociales y políticos se configuran no sólo por lo que aspiran a ser, sino por lo que los otros los condicionan a ser o hacer; lo cual no tiene, obviamente, un sentido unidireccional.

En América Latina esta relación contradictoria es profundamente asimétrica, considerando que la derecha sustenta su poder en el control sobre los procesos económicos y sociales, sobre los medios de socialización valórica y cultural, además de que conserva un enorme poder para disponer del monopolio legal de la fuerza más allá, y a pesar, de los gobiernos. Pero -y este es un dato de la nueva coyuntura-, el estallido de las contradicciones generadas por el propio capitalismo está erosionando su influencia política y la eficacia de las 'grandes verdades neoliberales' con las que ha justificado su dominio. Pero esta nueva coyuntura de crisis social también impacta sobre la izquierda, porque en varios países los tiempos sociales se han acelerado con mucha mayor velocidad que la de maduración de los actores políticos de izquierda, imponiéndole a éstos nuevas exigencias y ritmos desde los sectores populares mismos. Por decirlo de manera más coloquial, los desafíos a la izquierda le vienen desde 'arriba' y desde 'abajo'. Y le acotan los tiempos y condiciones para enfrentar los problemas, aún irresueltos, de las derrotas políticas que le impusieron las dictaduras y los autoritarismos civiles, junto con los impactos ideológicos de la crisis del socialismo llamado real, insuficientemente procesados.

Lo peculiar de la coyuntura es que la crisis social y política tiene una tendencia ascendente con relativa independencia de los actores políticos. Hay luchas sociales que no están vinculadas a los

partidos y veces son contradictorias con las decisiones partidarias. Varios de los partidos que orientan su accionar principalmente a la disputa electoral, son rebasados por las luchas de masas. No faltan los partidos que buscan contenerlas o intentan conducir las en función de sus tiempos propios u objetivos electorales, lo que deriva en desencuentros y distanciamientos con los luchadores sociales. Sea como fuere, las luchas sociales crean escenarios políticos nuevos, ante los cuales la izquierda partidaria debe responder. Tiene el reto de contribuir a que la enorme deseabilidad de cambio movilizada actualmente siga creciendo y que impida que la derecha pueda manipular la crisis política en su propio beneficio.

Las crisis sociales y políticas son momentos en los que se alteran o rompen los equilibrios de la dominación, y ésta activa inmediatamente su resistencia para impedir un peligro efectivo, o para prevenir un peligro posible, lo que supone un *no retorno* a la situación inmediatamente anterior al estallido de la crisis. En otras palabras, la ‘resolución’ de las crisis supone *avances* o *retrocesos* para los dominados. Esa ‘resolución’ tiene un alto grado de incertidumbre porque depende de múltiples factores propios y de la relación entre opuestos. Este es el contexto específico latinoamericano, que acelera tiempos, aumenta las demandas y expectativas de cambio, y exige definiciones políticas; es éste el marco para discutir los problemas de la izquierda, de su proyecto y del papel que tienen sus gobiernos en él.

La fluidez del momento político actual en América Latina no admite respuestas simples. Se puede afirmar que la izquierda es hoy mucho más fuerte que hace un lustro. Pero esa fuerza ganada es insuficiente para los desafíos que tiene que encarar, lo que podría significarle reversiones. Se puede afirmar que sus experiencias de gobierno tienen en todas partes un inequívoco signo positivo, colmadas de logros y de creatividad, lo que las convierte en el aspecto más rico de las prácticas políticas de varios partidos: vinculadas estrechamente con la población y respondiendo a sus necesidades, con una gran honestidad sometida permanentemente al escrutinio de la sociedad, obligadas a dar resultados, con esfuerzos de gestación de una ciudadanía gobernante, etcétera. Pero no siempre estas experiencias han contribuido (ni con el mismo grado) a generar fuerza política permanente, y también corren el peligro de rutinizarse como espléndidas administraciones que podrían agotarse como proyecto alternativo.

Hay en nuestra región experiencias de gobierno que por su permanencia en el tiempo, de más de una década en Uruguay y Brasil y de seis años en México y El Salvador, aportan elementos de reflexión consistentes para analizar la capacidad de gestión gubernamental de la izquierda. Los balances claramente positivos explican que crezca la confianza sobre esas capacidades y que se piense que la izquierda está facultada para gobernar a nivel nacional. Pero los gobiernos, a cualquier nivel, no son sólo acciones administrativas. Implican una concepción sobre la sociedad en la que actúan y una direccionalidad en el ejercicio de las parcelas de poder que poseen. Ha habido análisis sobre las gestiones gubernamentales y sobre sus aportes para reformar democráticamente al Estado: una nueva relación entre gobernantes y gobernados, gestando una ciudadanía gobernante; un nuevo concepto de eficiencia asociado a la eficacia social de las políticas; un ejercicio de transparencia que implica control real sobre la gestión, que rompe con la falaz transparencia que pregona la derecha neoliberal limitada a ofrecer cifras que, con suerte, sólo los ungidos (los



FIM

famosos ‘expertos’) logran desentrañar, etcétera. Con toda esa riqueza, es significativo que estas creaciones alternativas sean insuficientemente valoradas e inciden poco en los estudios profesionales de administración pública que se desarrollan en las universidades, en las que la hegemonía conservadora sigue operando. En las siguientes y breves páginas no abordaré esta temática de manera particular, y propondré, en cambio, algunas reflexiones sobre algunos de los otros aspectos que hacen a la discusión de los gobiernos como parte del proceso político, en que se dirimen las fuerzas relativas entre dominantes y dominados.

ESPECIFICIDADES DEL CONTEXTO POLÍTICO EN QUE ACTÚA LA IZQUIERDA

A pesar de la heterogeneidad antes señalada entre las organizaciones de izquierda, todos los partidos desarrollan su actividad política en un contexto altamente homogeneizado por la imposición de un modelo conservador de democracia liberal, tras las transiciones desde regímenes dictatoriales o autoritarismos civiles a regímenes representativos. La mayoría de los partidos participan por primera vez en el sistema representativo bajo ese modelo político conservador. Esto les representa un problema adicional para definir un proyecto político independiente, capaz de constituir sujetos políticos autónomos a la vez de participar en las instituciones representativas.

Debe considerarse que excepto en Chile, Uruguay y en menor medida en Costa Rica, la democracia liberal ha sido excepcional como modalidad real de la política en la región antes de la década de los setenta. La política latinoamericana transitó por regímenes autoritarios –algunos de ellos de tipo corporativo- o con estructuras de poder oligárquico modernizado, en los que el discurso liberal fue francamente conservador. Fueron específicamente esos contextos no democrático-liberales los que abonaron en amplios sectores de la izquierda la no consideración de la democracia burguesa como espacio de acción política, y la búsqueda de prácticas políticas por otros medios (desde antes, pero aun más después de la Revolución Cubana), hasta acciones políticas marginales e incluso lógicas corporativas. Esa ausencia de liberalismo político en América Latina es una de las principales razones de que no madurara una teorización de izquierda sobre la democracia política como un escenario específico de la luchas de clases –como medio de *cambio*-, que confrontara la visión dominante de la democracia como medio de *conservación*, como instrumento para administrar políticamente las relaciones de poder de modo de que no cambien. La acusación que habitualmente se le hace a la izquierda latinoamericana de ser ‘instrumentalista’ en sus concepciones sobre la democracia carece de fundamento histórico. No pudo serlo. Si algún error teórico puede atribuírsele, es que desarrolló una concepción economicista del Estado entendido sólo como ‘reflejo’, con escaso análisis de la dominación y las mediaciones. Estos mecanicismos tampoco le permitieron ser ‘instrumentalista de la democracia’. La acusación tiene otras intenciones, que no discutiré aquí.

Cuando la mayor parte de la izquierda latinoamericana experimenta la democracia representativa, hacia finales de los años ochenta, lo que en realidad descubre es la *democracia gobernable*, la realización histórica más conservadora de la democracia liberal. El modelo de democracia elitista

T

N

I

FIM

y de equilibrios, como instrumento de administración política del *statu quo* (Hayek, 1990), concibe a la democracia sólo como método de formación de gobiernos y de reclutamiento de las élites que decidirán *por sí y ante sí* a nombre de la sociedad. El modelo presupone que existe ‘un consenso estructural básico’ en la sociedad (Schumpeter). Y que no habiendo discrepancias en los asuntos económicos, éstos no necesitan formar parte del debate político entre las élites, quedando exclusivamente en la esfera del mercado. Las élites políticas se diferencian apenas por cuestiones de forma, y el debate será solamente sobre asuntos procedimentales. (Sartori, 1988). Sin embargo, el propio Joseph Schumpeter advertía a mediados de la década de los cuarenta que este ‘[...] método democrático no funciona nunca del modo más favorable cuando las naciones están muy divididas por los problemas fundamentales de estructura social’.

No obstante, es el modelo que se impone en América Latina. Sustrae a la economía del debate político bajo el supuesto de que ésas son decisiones incontrovertibles del mercado y, más aún, de la ‘globalización’, que es presentada como una fuerza metafísica ajena a las relaciones de poder. Haya o no ‘consenso estructural’, la derecha liberal impone como *consenso* que nadie puede torcer el destino impuesto por el mercado. Así avanza la estrategia de la *profecía autocumplida de la globalización*: no se pueden contrariar las leyes del mercado, se renuncia a tomar decisiones; ergo, los embates del capital trasnacional de origen fóraño o criollo se multiplican sin poder frenarlos. El equilibrio deviene de no alterar los contenidos de ese consenso. Cualquier demanda o conflicto que vaya en contra de las decisiones del capital atenta contra la democracia. La gobernabilidad (*governability*), como búsqueda de la estabilidad política (lo que es equivalente a *obediencia*), pasa a ocupar el lugar de la democracia. Ésta deja de ser un mecanismo institucional para procesar conflictos, porque éstos se consideran un bloqueo a la democracia. La democracia misma se hace gobernable.

En este modelo político, al sistema de partidos le corresponden dos funciones: 1) ser los vehículos de selección de las élites (elecciones); 2) actuar como filtro para impedir que los intereses contrarios a los objetivos capitalistas puedan convertirse en políticas estatales. Los partidos tienen como función filtrar la representación de intereses subalternos, pero también impedir que sus portadores se organicen para expresarlos como demandas.

Esas son las reglas del juego a que debe someterse la izquierda para ser aceptada por el sistema con el status de pares respetables. El sometimiento incluye chantajes y presiones, cooptaciones mediante prebendas, y la interiorización de las concepciones liberales-conservadoras de la política. Se le condiciona a aceptar (por convicción o por subordinación), que la política es un mercado de competencia por consumidores (votantes) cuya captación exige ofertas políticas indiferenciadas que, como cualquier otro producto a vender, debe privilegiar la imagen a su contenido. El mercadeo (marketing) político además, se convierte en América Latina en un espectáculo de la peor ralea.

El modelo funcionó durante una década, gozando de una prolongada tolerancia de parte de una sociedad que, en aras de conservar las libertades públicas, renunció a ‘poner en peligro la democracia’ con demandas igualitarias. También funcionó porque, simultáneamente, en los marcos de



FIM

la reestructuración capitalista, se gestó una sociedad con una debilitada capacidad de demandar no obstante estar plétórica de necesidades. La eufemísticamente llamada flexibilización laboral, que liquida toda protección legal a los trabajadores, los condujo a tener que aceptar la reducción salarial, la pérdida de derechos, la precariedad contractual y demás formas de sobre-explotación, a cambio de conservar un empleo que el propio modelo económico destruye. La dispersión organizativa; el individualismo inducido desde la economía pero también mediante contrarreformas educativas y culturales; la competencia de pobres contra pobres para acceder a los escasísimos recursos que el Estado entrega de manera focalizada, disgregó las capacidades de resistencia y demandas.

Durante una década, el capital tuvo impunidad para avanzar en sus objetivos. Pero al mismo tiempo, el funcionamiento sin obstáculos del modelo político terminó por poner en crisis la credibilidad del sistema representativo: se generalizó el desprestigio de 'los políticos', 'los partidos' y 'la política'; el rechazo al elitismo político y al prebendismo; así como la convicción de que las instituciones representativas, particularmente el parlamento, son inútiles para modificar la realidad económica que afecta a la mayor parte de la población.

T
N
I

A finales de la década de los noventa, la crisis del sistema representativo alcanza también a aquellos partidos de izquierda que se subordinan a esas reglas del juego para la gobernabilidad. Esto ocurre con diferencias en los países en función de los arraigos sociales que tienen, que obligan a los partidos a una mayor independencia política. Pero ninguno pudo evitar contaminaciones con las prácticas sistémicas, que invariablemente fueron objeto de críticas. Esta es una de las principales razones del alejamiento de sectores de izquierda respecto de los partidos, llegando incluso a manifestarse como un rechazo genérico a 'la política'. Es un fenómeno de dimensiones no desdenables pues involucra a una izquierda no partidaria que tiene importante capacidad de convocatoria social.

FIM

Un indicador del rechazo a este modelo político es el abstencionismo electoral: aunque en la mitad de los países el voto es obligatorio, la abstención supera el 50 por ciento en el promedio regional; que a juzgar por el escenario de luchas, no es precisamente un signo de apatía política. Hasta el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reconoce que hacia finales de siglo un 65 por ciento de los latinoamericanos están descontentos con 'esta' democracia (BID, 2000).

Prueba de que se trata fundamentalmente de un rechazo al modelo político de gobernabilidad, es que cuando en América Latina aparecen opciones políticas de cambio creíbles, las esperanzas se renuevan con la expectativa de que un gobierno de signo político opuesto modifique la realidad económico-social. Cada vez que la izquierda fue capaz de ofrecer esas alternativas creíbles, creció electoralmente. Pero la adhesión a los candidatos presidenciales es mayor que la que cosechan sus partidos, especialmente los que son juzgados como electoralistas.

La crisis de representación que afecta a los partidos de derecha, pero que acusan en diversos grados los de izquierda, hace que el sistema de partidos pierda eficacia como mecanismo de control social y político, como instrumento de gobernabilidad. Y cuando el sistema representativo recu-

pera credibilidad, lo hace por la izquierda. Por las dos razones, desde mediados de la década de los noventa, los políticos e intelectuales más lúcidos de la derecha elaboran estrategias para transferir a otras instituciones estatales las funciones de control social y político, que el sistema de partidos ya no ejerce eficazmente.

En eso consiste el llamado *neoinstitucionalismo*, que ha sido engañosamente presentado por sus promotores como el ‘consenso postliberal superador del Consenso de Washington’. Las llamadas ‘reformas de segunda generación’ tienen el propósito de intensificar el papel del Estado para ‘completar’ las políticas neoliberales: más privatizaciones, legislaciones laborales que *norman* la *flexibilización*; entrega de territorios, de recursos energéticos, biodiversidad y agua al capital transnacional (en eso consisten el Plan Puebla Panamá, el Plan Colombia, la Iniciativa Andina y otros ‘megaproyectos’); control militar directo de Estados Unidos sobre nuestros territorios como garantía de su dominio económico a través del ALCA; judicialización y criminalización de las protestas sociales; judicialización de la política para impedir oposiciones parlamentarias a los Ejecutivos, etcétera. Esto se lleva a cabo bajo el discurso del ‘perfeccionamiento del Estado de derecho’ y de la ‘modernización institucional’, exclusivamente orientadas a dar plena seguridad al capital en tiempos borrascosos. Son políticas neo-coloniales, muchas de las cuales se imponen mediante tratados internacionales entre Estados formalmente soberanos, y que tras su normalización como derecho público internacional se transforman automáticamente en legislación nacional y en contenido de las políticas públicas. Con el nuevo siglo estas acciones se han acelerado, a los ritmos que reclama la crisis capitalista, particularmente la de Estados Unidos, y justamente cuando están aumentando las resistencias populares: de allí la intensificación de la represión en la nueva coyuntura.

Las *políticas públicas* se convierten en eje de realización de estas estrategias. Recubiertas de una aparente neutralidad técnica, siguen siendo un canal de cooptación de académicos y profesionales. La crítica al neoliberalismo no ha llegado al terreno de las ‘nuevas políticas públicas’: actualmente la derecha define con muy poca oposición la ‘agenda’ de lo *deseable*, es decir, lo que es *financiable* y por lo tanto *posible* en la acción gubernamental en América Latina, incluida desde luego la de izquierda. Ésta ha resultado permeable a ese discurso y a varias de esas políticas, en general sin conocer sus implicaciones, e involuntariamente llega a legitimarlos.

Ocurre así que, tanto en el sistema representativo como en la gestión gubernamental, la izquierda no siempre logra superar los condicionamientos de la derecha, que tienen el propósito de coartar su potencialidad alternativa y convertirla en una de las fuerzas políticas que administran lo existente, explotando una *pluralidad mediatizada* para ganar legitimidad. Desde luego que la dialéctica política no depende solamente de las intenciones de la derecha. Y si la carencia de análisis más críticos sobre estos temas es una característica bastante común a la izquierda partidaria de la región, también es cierto que en la práctica muchas veces logra compensarlo con acciones que, en los hechos, van en dirección opuesta a esos objetivos conservadores. Pero no siempre. Los riesgos de un pragmatismo acrítico están presentes en los gobiernos municipales y son mayores cuando se trata de gobiernos nacionales.



FIM

LO LOCAL EN DEBATE

Lo local ha sido la gran ‘novedad’ de la década de los noventa, sin ser precisamente un tema nuevo. Tradicionalmente los gobiernos locales han sido un espacio de distribución de cuotas de poder entre los sectores dominantes: el ‘pintoresco’ ámbito del caudillismo y caciquismo latinoamericanos. Desde comienzos de la década de los ochenta fue uno de los ejes de las reformas neoliberales del Estado: la desconcentración gubernamental permitió liberar al Estado central de funciones sociales, reducir sus presupuestos y su personal. Bajo las nuevas democracias, liberó al sistema representativo y al Estado de tener que responder a demandas nacionales inaceptables. El ámbito de lo local es el espacio preferencial de las nuevas formas de clientelismo político, a través de las políticas sociales focalizadas que llevan a cabo los gobiernos centrales; un mecanismo de control social a muy bajo costo, que mantiene a los más pobres disgregados y en competencia entre sí. Un eficaz mecanismo de gobernabilidad.

Y al mismo tiempo, lo local ha sido uno de los ejes de la justificación ideológica de la reestructuración capitalista neoliberal, al presentarlo como lo que conecta la *sociedad de mercado* con la *globalización*, conexión que los centros de elaboración ideológica del capitalismo han denominado como lo *glocal*. En la construcción de este término se sintentizan varias de las conceptualizaciones neoliberales sobre la sociedad actual. Todas ellas se articulan a partir de la afirmación ideologizada de la irrelevancia del Estado nacional: mediante una operación de inferencias arbitrarias, se transforma el debilitamiento del componente ‘nacional’ en la supuesta desaparición del Estado mismo (justificación necesaria para derribar las barreras políticas a la circulación del capital transnacional). Paralelamente, la sociedad es convertida en el símil del mercado: individuos en competencia, que buscan compensar la pérdida de la *comunidad nacional* en pequeñas comunidades de pertenencia, de adscripción voluntaria, que establecen entre sí múltiples relaciones (*cleavages*) que las van conectando de modo reticular. En cada una de esas pequeñas comunidades los individuos toman decisiones (sobre asuntos parciales), constituyendo así una ‘poliarquía’ (Dahl, 1993) en la que el poder está distribuido, disperso. Esto es posible cuando se privatiza y dispersa el poder del Estado en el mercado. Para la concepción pluralista liberal, la sociedad es un espacio de intercambio privado entre iguales en tanto propietarios (sin importar si unos lo son de capital y otros de su fuerza de trabajo). Los individuos tienen poderes ‘iguales’ que ejercen como ciudadanos (votantes) para elegir a las élites que los gobernarán (‘lo público estatal’), y que ejercen en pequeños espacios gregarios sobre asuntos particulares, de organizaciones no gubernamentales (‘lo público no estatal’). Se hace desaparecer la configuración clasista de la sociedad y el poder, desaparece la política como instancia de decisión de alcance nacional para quedar arraigada en particularismos locales, desaparecen los sujetos sociales colectivos. Lo ‘glocal’ es asumido como una -nunca demostrada- ‘desterritorialización nacional del poder’, con una simultánea ‘reterritorialización de los particularismos’ en el espacio local.

Esta teorización está dirigida a justificar la disgregación social promovida por el capitalismo neoliberal, funcional al modelo político para la gobernabilidad. Y se utiliza con intención normativa, como la democracia deseable: ajena a los antagonismos de clase; que no decide absolutamente nada sobre el modelo nacional de desarrollo sino sobre efectos específicos del mismo; que reduce lo social a pequeños grupos de referencia.

T

N

I

FIM

Muchos intelectuales y políticos de izquierda son receptivos a estos argumentos. En cierto modo, son 'explicaciones' que sirven para aceptar con resignación los retrocesos sociales. Hay posturas extremas que llegan a pensar lo local como la nueva forma histórica de lo social, que sustituye definitivamente a los movimientos sociales de resistencia y lucha antisistémica, a cuya organización se renuncia. Hay quienes se refugian en lo local para tomar distancia de un sistema representativo que desprecian. Otros, por el contrario, utilizan el espacio local como plataforma de lanzamiento para conseguir candidaturas. Y son muchos los que reifican lo microsocioal -la sustancia de las ONG-, porque éstas son el medio para conseguir ingresos financiados internacionalmente (por el capital transnacional). Pero también en estos espacios locales van desarrollándose formas de organización autogestiva popular para resistir al neoliberalismo y generar alternativas de sobrevivencia y solidaridad.

Hay algo de todo esto presente en las experiencias de gobierno local de izquierda, aunque sus pesos específicos cambian según sea la naturaleza de los proyectos. Hay diferencias entre los que asumen lo local como sustitución de sujetos sociales colectivos, o los que conciben lo local como complemento a su reconstitución, aportando a ese proceso los esfuerzos de reconstrucción parcial del tejido social en algunos segmentos de la población. Hay diferencias entre políticas sociales que son más asistencialistas, y las que promueven la organización más permanente del universo social involucrado en esas políticas. Son diferentes los proyectos que se concentran en la provisión de servicios urbanos básicos, que los que combinan lo territorial con lo sectorial, porque son estas últimas problemáticas las que permiten ganar perspectivas más amplias sobre el orden social y económico cuestionado. Y también son importantes las diferencias en las concepciones sobre la participación democrática a este nivel, en cuanto a la capacidad de decisión que se tenga y los ámbitos que abarque: no es lo mismo decidir sobre opciones de obras puntuales, que decidir sobre los proyectos económicos y sociales amplios, su orientación y su implementación. La participación también es diferente si se limita a avalar la gestión gubernamental por medio de encuestas telefónicas, que tener facultades hasta para remover funcionarios de gobierno. La experiencia más rica la aportó el Presupuesto Participativo inaugurado en Porto Alegre, que se convirtió en un paradigma de la participación democrática directa en el ámbito local para toda América Latina. Pero muchas veces se le piensa más desde la lógica procedimental de la participación que desde sus contenidos como proyecto político.

Se trata de diferencias clave entre crear condiciones políticas nuevas o para limitarse a administrar con eficiencia y altruismo lo que existe. La *good governance* no ha sido privativa en todo tiempo y lugar de la izquierda. Hoy es casi una virtud exclusiva de ésta frente al patrimonialismo estatal de la derecha. Pero no es el único rasgo que puede definir por sí mismo a un proyecto alternativo, en esa pérdida de contenidos, puede conducir a la rutinización y pérdida de impulso participativo en los gobiernos, como de hecho ocurre ya en algunos países. El buen gobierno de la izquierda también es apreciado por los neoinstitucionalistas de derecha, porque aporta credibilidad genérica a las *políticas públicas*; puede disminuir los grados de descontento y conflictividad, y contribuir a reforzar la gobernabilidad sistémica. Estas también son algunas de las claves de los distintos niveles de tolerancia de la derecha a la *cohabitación política* con gobiernos de izquierda, por supuesto que nunca exenta de agresiones, bloqueos y descalificaciones para debilitarlos.



FIM

Esa tolerancia desaparece cuando el territorio se convierte en espacio de coordinación y despliegue de la rebeldía popular, de articulación de las luchas de los pobladores con las de campesinos, sindicatos, desempleados y estudiantes, como está ocurriendo en varios de nuestros países, en franca resistencia a las políticas gubernamentales y a la expropiación neocolonial de nuestras riquezas naturales. El territorio como escenario de la contradicción de clases -un proceso en ascenso en América Latina- es la crítica de izquierda más contundente a las concepciones liberales conservadoras, hegemónicas hasta hace unos pocos años. Pero también interpela a varios de los partidos que se subordinaron a ellas.

Si el territorio no es concebido como el espacio de confrontación social con el poder del capital, los gobiernos pueden llegar a considerarse ajenos a esas luchas, e incluso operar como simples administradores del orden. Hay experiencias de ese tipo que amplían las brechas entre los movimientos sociales y los que tendrían que ser considerados como 'sus' gobiernos.

T
N
I

Según sea la concepción de la sociedad de la que se parta, es el modo como los gobiernos piensan el problema de la representación del interés general, de lo que se deriva el objetivo de 'gobernar para todos'. En principio, esto significa la provisión democrática de servicios y derechos urbanos, sin exclusión de ningún tipo. Desde las concepciones liberales pluralistas, esto se traduce como neutralidad social y equidistancia o equivalencia en las necesidades a atender, lo que conduce a que sea la clase dominante la que imponga sus decisiones e intereses, mimetizada como 'la sociedad civil poliárquica'. Esto refuerza la concepción impuesta con la reforma neoliberal del Estado, que convierte el interés del capital en el interés general, y expulsa de la esfera pública a los intereses populares.

FIM

Y en realidad, aun bajo los estrictos cálculos electorales con que muchas veces se deciden políticas gubernamentales, no puede dejar de asumirse que, no sólo filosóficamente, sino también cuantitativamente, *lo general es cada vez más lo popular*. Sin embargo, la obsesión por la gobernabilidad (*governability*), traducida como privilegio del orden (que reclaman los poderosos para su tranquilidad), a veces deja en segundo plano las acciones contra la desigualdad social. De este modo los gobernantes de izquierda pueden hacerse más confiables ante empresarios y medios de comunicación, pero pueden terminar perdiendo fuerza política. La derecha siempre presenta como anarquía y delincuencia todo lo que altere el statu quo y muchas veces logra poner a la izquierda a la defensiva. Es cierto que no siempre las demandas populares se expresan con madurez política. Que la desesperación ante las carencias, sumada a la debilidad social y organizativa, frecuentemente conduce a formas de primitivismo político. Superarlo, y no controlarlo, es parte de los retos que tiene la izquierda.

En ese sentido, no ha sido fácil para la izquierda gobernante encarar su relación con los sindicatos. No sólo con los que están subordinados a la clase dominante y a sus partidos, que son utilizados como fuerza de choque contra los gobiernos de izquierda. También le ha resultado difícil la relación con sindicatos independientes y cercanos a la izquierda. En esos conflictos muchas veces le asiste la razón a los gobiernos que se enfrentan al deterioro de la ética laboral y a diversas for-

mas de desclasamiento, nocivos hasta para las causas de los propios trabajadores. Los gobiernos no pueden dejar de exigir resultados en el trabajo, pero no pueden dejar de reconocer que ello también es efecto de la destrucción social y moral demoledora del capitalismo actual. Sin embargo, no pueden sobredimensionarse estos problemas como los únicos causantes de las dificultades de relacionamiento, atribuibles sólo a los trabajadores. No solamente está en juego una relación funcional, sino también el complejo y viejo problema de la autonomía social frente a cualquier gobierno, incluso los de izquierda. Cuando esas fuerzas autónomas no existen como acicate del proyecto político, la lógica del administrador termina por agotarlo. El reto aumenta cuando se ganan gobiernos nacionales.

GOBIERNOS Y ELECCIONES

Más allá de las diferencias de los proyectos, en todos los países sus gobiernos le han dado votos a la izquierda. En algunos casos, contrarrestando la crisis de representación de los partidos mismos. Con diferentes grados, se observa una cierta dualización de los partidos, entre un sector partidario que trabaja de cara a la población y otro que participa en o está vinculado al elitismo político sistémico.

Ese dualismo opera con influencias recíprocas desiguales. En general, los aspectos más positivos de las experiencias de gobierno tienen una escasa incidencia en la conceptualización y prácticas de los partidos; son poco discutidas como aportes a los proyectos políticos. Es posible que en algo influya el hecho de que son los propios equipos de gobierno los que buscan eliminar interferencias partidarias en aras de eficiencia decisional. En cambio, los gobiernos son influidos por las prácticas partidarias más cuestionadas, como el electoralismo, porque la existencia misma de los proyectos de gobierno depende de su continuidad, y eso requiere de seguir ganando elecciones. También el tradicionalismo político que exhiben algunos partidos llega a expresarse en las decisiones gubernamentales en materia de alianzas sociales, en la determinación de políticas en función de los tiempos electorales, o en el manejo de las relaciones de los funcionarios de gobierno con los otros actores del sistema político.

Conforme crece la potencialidad electoral de la izquierda en los nuevos contextos sociales, aumentan los riesgos de tradicionalismo político de aquellos partidos que convierten en objetivo casi único el ganar elecciones. Un rasgo de ese tradicionalismo político es, por ejemplo, la conceptualización liberal del territorio como geografía electoral. En eso consiste la ‘ciudadanización’ de varios partidos, que abandonan sus estructuras organizativas sectoriales y adosan la organización del partido a las circunscripciones electorales, activándolas sólo para períodos comiciales, internos o nacionales. Partidos así estructurados contribuyen poco a los proyectos locales de gobierno.

El impacto del electoralismo se da en todos los partidos, al menos en los tiempos de elecciones; de que sean efectos duraderos depende de un sinnúmero de circunstancias, entre ellas la inserción de los partidos en las organizaciones sociales que les marcan sus propios tiempos y exigencias. Lo cierto es que en los tiempos electorales ganan fuerza en los partidos las posturas más prag-



FIM

máticas e identificadas con las lógicas del mercadeo (*marketing*) político. Eventualmente cuestionadas en otros contextos políticos, cuando crece el caudal de votos, esas posturas electoralistas también aparecen en lo inmediato como las triunfadoras.

Que se ganen elecciones no significa siempre que crezca abrumadoramente el caudal de votos, también pueden ganarse con altos índices de abstencionismo. Las momentáneas recuperaciones de credibilidad del sistema representativo no compensan la dispersión social, la inorganicidad que aún tiene el descontento social y tampoco eliminan completamente el desencanto ante una década de perversiones políticas. El hecho es que faltan votos. Bajo la premisa de que los fines justifican los medios, los votos faltantes se buscan mediante alianzas cupulares con el centro y la derecha. Claro que la derecha hace estas alianzas oportunistas con la izquierda sólo cuando ésta exhibe una importante fuerza real o potencial. Lo cierto es que esas acciones cupulares suelen dar resultados en votos. Pero la decisión de sumar votos cautivos de la derecha o del centro 'por arriba', en lugar de conquistar políticamente a las franjas del electorado popular que se aleja de los partidos de derecha (un proceso más prolongado), introduce nuevas contradicciones para la izquierda. No son 'entregas de votos gratuitas' por parte de la derecha, implicando condicionamientos futuros para los gobiernos de izquierda, que en algún momento terminan pagando esos costos.

T

N

I

FIM

En el corto plazo, decisiones políticas de este tipo parecen inocuas cuando ofrecen triunfos electorales. Desde luego que los triunfos son deseables y necesarios incluso con los riesgos mencionados, pues siempre representarán un cambio en las relaciones de poder y la posibilidad de atender algunas de las agudas necesidades económicas. Por limitadas que sean las reformas que se lleven a cabo, contarán con apoyo popular y son valiosas por sí mismas. Pero los impulsos reformadores estarán condicionados por los compromisos con fuerzas no-progresistas, más allá de los votos conquistados. Lo que hace la diferencia en estos escenarios previsibles, es si los partidos tienen fuerza social y política, si los sectores populares pueden defender sus conquistas. El ejemplo venezolano lo confirma: fueron capaces de conjurar dos intentos de golpes de Estado. La nueva experiencia de Brasil constituye un verdadero laboratorio político respecto a mucho de lo que aquí se señala: una izquierda fuerte que gana con alianzas con la derecha y centro-derecha, en un país con un importante movimiento popular urbano y rural. En Ecuador, el triunfo de Lucio Gutiérrez en la primera vuelta se dio en alianza con Pachakutik, obteniendo un 20.43 por ciento del total de votos; el de la segunda vuelta de noviembre de 2002 (54.79 por ciento) se alcanzó con el apoyo de otros partidos de izquierda de menor fuerza electoral y con compromisos políticos con la derecha y centro-derecha. A pocas semanas de asumir en enero de 2003, estos compromisos alejaron al gobierno de Gutiérrez de sus alianzas populares anteriores; sus aliados condicionaron una posible ruptura con el gobierno a que éste cambiara sus rumbos económicos y sociales y su política internacional de franca subordinación a Estados Unidos, lo cual no se produjo y condujo finalmente al alejamiento de movimientos sociales y partidos de izquierda.

Las positivas gestiones gubernamentales aportan votos. Pero, del mismo modo, si la adhesión a las administraciones de izquierda no se traduce en procesos de organización y conciencia crecientes de los gobernados, por un lado, y de adhesión al proyecto del partido, por otro, tampoco buenas gestiones garantizan un electorado *cautivo*, como también se observa en la experiencia brasile-

ña de Rio Grande do Sul, en la que el PT fue derrotado a nivel estadual.

Una vez más, estamos ante el problema nodal del proyecto de izquierda. Una fuerza electoral que no se sustente en fuerza política es inestable y precaria, y hasta puede transformarse en frustración y retrocesos posteriores.

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

El problema de la democracia es, en todo tiempo y lugar, el de la emancipación humana. La posibilidad de que una sociedad decida con autonomía sobre su presente y su futuro, está asociada a la conquista de la igualdad social. Una sociedad que está en los límites de la sobrevivencia, que carece de los medios económicos, educativos y de información suficientes para ejercer su libertad, no puede constituirse como ciudadanía plena.

En América Latina, la gestación de esa ciudadanía plena pasa necesariamente por eliminar las poderosas fuentes de desigualdad, explotación, miseria y marginación actuales. La lucha democrática en nuestra región es, por necesidad, una lucha contra el capitalismo realmente existente, el neoliberalismo. La lucha democrática es, guste o no el término, una lucha de clases. Se trata de un proceso complejo y prolongado, que requiere de la reconstrucción de los sujetos sociales disgregados y debilitados por la dominación capitalista, su fortalecimiento como actores políticos capaces de frenar las políticas dominantes y, lo que no es menor, con capacidad para reconstruir nuestras sociedades.

En el descontento y rechazos actuales al orden social más antidemocrático que haya conocido América Latina en su historia moderna, hay un germen poderoso de avance democrático. Hoy se pueden conquistar gobiernos.

He propuesto un análisis en el que los problemas no se tratan en blanco o negro. He tratado de dejar claro que no comparto la idea de *'cuanto peor, mejor'*: en procesos complejos, los atrasos no invalidan los logros, que son necesarios. Sin embargo, tras varios años de crecimiento electoral de la izquierda –tan difícil de lograr, venciendo miedos sociales ante una derecha que busca impedirlo por cualquier medio, incluso violento– también es justo recoger aquí una pregunta que muchísimos latinoamericanos se hacen: *'ganar para qué'*. Nunca hubo tantos parlamentarios y municipios de izquierda como en estos años, que han sido de los más trágicos para nuestros pueblos. Aún con gobiernos de izquierda, la frustración ha crecido, los jóvenes siguen sin esperanza. Más allá de sus deficiencias, siempre es positivo que gobierne la izquierda; porque no es indiferente que no se robe desde los gobiernos, que no haya abusos de las burocracias, que no haya represión, que se recuperen las calles, plazas y espacios de cultura. Pero todo esto que es altamente apreciado para la dignificación humana, tiene un valor menor para los que apenas pueden sobrevivir, y en América Latina esto no es una metáfora para las mayorías. Su vida depende de que se haga retroceder a este capitalismo depredador.



FIM

Ganar gobiernos no resuelve mágicamente, ni en un acto, los graves problemas estructurales -siempre se afirma, y con razón. El gradualismo político se impone por necesidad, pero no como ideología. La ideología gradualista es el camino más corto a las derrotas. Porque es la suposición —ésta sí mágica— de que pueden generarse cambios sin tocar al poder. Hasta la más caballerosa cohabitación política se acaba apenas se afectan, y hasta levemente, los privilegios capitalistas.

El gradualismo es profundamente radical cuando se trabaja para construir las condiciones políticas que permitan dar pasos hacia delante, cada vez más firmes. Y esas condiciones las dan pueblos organizados y en lucha. Los conflictos con el poder son inherentes a ese andar ‘sin prisa y sin pausa’, como decía el poeta. La gobernabilidad (*governability*) es la afirmación del *statu quo*, no puede ser opción para la izquierda. Tampoco puede medir los avances sólo por los espacios de poder que ella misma conquista.

Los desafíos son enormes, porque hoy el capital tiene el poder más concentrado y potente de su historia y no está precisamente en una retirada voluntaria. Las contradicciones que genera y enfrenta son graves, pero no son automáticamente derrotas políticas, que no pueda todavía manipular. De ahí la importancia de analizar las insuficiencias y errores de la izquierda, que cuentan más cuanto más se avanza. No es una paradoja, sino la dialéctica misma de la política emancipadora. Superar esos retrasos es una desafiante tarea colectiva contra la autocomplacencia pero también ajena a toda autoflagelación. El optimismo no es infundado en una América Latina cuyas mayorías claman por cambios, y con una izquierda que si tiene que pensar en problemas, es porque está andando precisamente ese camino.



FIM

¹ La discusión de esas experiencias está en el libro que coordiné hace cinco años (Stolowicz, 1998). El libro fue elaborado por un colectivo de investigadores latinoamericanos en él que participaron también: Hugo Zemelman (Chile), José Eduardo Utzig (Brasil), Álvaro Portillo (Uruguay), Margarita López Maya (Venezuela), Nidia Díaz (El Salvador), Telésforo Nava y Emilio Pradilla (México), y Armando Fernández Soriano (Cuba).

² Instituciones como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de la ONU, establecen que hay un 43 por ciento de hogares pobres. Cuando se hacen las correcciones de hogares a personas, la cifra asciende por lo menos a 60 por ciento. En México, los estudios sobre pobreza de Julio Boltvinik, investigador de El Colegio de México, transforma el 40 por ciento oficial medido en hogares, a 74 por ciento medido en personas (Boltvinik 2001a).

³ Para el Banco Mundial, son pobres los que viven con dos dólares o menos al día, y extremadamente pobres los que lo hacen con uno o menos. Desde luego que estos parámetros de medición suponen condiciones infrahumanas, a los que hay que sumar en condiciones de pobres a muchos millones más (World Bank, 1990 y 2001).

⁴ Datos a partir de Cepal (2003), que deben ser corregidos tras las crisis económicas que estallaron en 2001 y 2002 en Argentina y Uruguay.

⁵ En 1992 la región debía 478.000 millones de dólares. Después del pago de una larga cantidad como amortización e intereses, la deuda creció hasta 817.200 millones en 2001. En total, América Latina ya ha transferido cuatro veces los recursos originalmente recibidos, lo que es equivalente al total de recursos necesarios para cubrir las ‘necesidades básicas’ de la población de la región durante 17,5 años, según cálculos recientes (World Bank, 2003; Fernández-Vega, 2003: 24).

⁶ En México, por ejemplo, en 2001, los más ricos (decil X) dejaron de pagar impuestos por un equivalente a 60 mil millones de dólares. La bolsa de valores no paga impuestos. Pero los bancos privados recibieron 100.000 millones de dólares por la estatización de sus deudas (Boltvinik, 2001b:38).

⁷ El proyecto político Bolivariano en Venezuela se lleva a cabo en ruptura con ese modelo de democracia.

⁸ Análisis con más detalle los problemas de la *democracia gobernable* en un ensayo anterior (Stolowicz, 2001).

⁹ Sólo en Uruguay, en 1992, pudo frenarse una privatización por los canales políticos institucionales, mediante un referéndum.

¹⁰ En muchas de las críticas hay una asimilación genérica de la política sistémica a toda forma de política (Stolowicz, 2002).

¹¹ Desarrollo con mayor detalle las estrategias, discursos y políticas neoinstitucionalistas en América Latina en uno de mis trabajos anteriores (Stolowicz, 2003).

¹² La formalización, además, no permite observar las implicaciones que tiene en la relación entre democracia directa y democracia representativa locales, que involucra la acción partidaria. O se extrapolan los procedimientos sin considerar su aplicabilidad según sea el tamaño de los municipios y ciudades.

¹³ Esto ocurre en México. El PRD está muy cuestionado, pero el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, cosecha un 80 por ciento de aprobación en encuestas, en mayo de 2003. Cuánto de esto se convertirá en votos al PRD en las elecciones parlamentarias de julio de 2003, o quede en abstención, dará la medida de la profundidad de la crisis de representación del partido.

¹⁴ En Brasil, en la primera vuelta de las elecciones de octubre de 2002, Luiz Inácio *Lula* da Silva obtuvo el 46.44 por ciento de los votos nacionales. El PT obtuvo 18.38 por ciento de los votos nacionales para Diputados y el 18.52 de los votos nacionales para senadores. En Rio Grande do Sul, el PT perdió el gobierno del estado, que lo ganó el PMDB. En la primera vuelta, Tarso Genro obtuvo el 37.25 por ciento de los votos, siendo el candidato a gobernador con menor porcentaje de votos en todo el país. En la segunda obtuvo el 47.33 por ciento.

REFERENCIAS

BID (2000) *Desarrollo más allá de la economía*. Washington D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo (Inter-American Development Bank).

Boltvinik, J. (2001a) *Pobreza y distribución del ingreso en México*. México: Siglo XXI Editores.

Boltvinik, J. (2001b) 'Los ricos no pagan impuestos'. *La Jornada*, October 12, p. 38, México.

CEPAL (2003) *Panorama social de América Latina 2001-2002, Anexo estadístico*. Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean).

Dahl, R. (1993) *La poliarquía. Participación y oposición*. México: Rei.

Fernández-Vega, C. (2003) 'Saqueo institucionalizado'. *La Jornada*, April 21, p. 24. México.

Hayek, F. (1944) *Camino de servidumbre*. Madrid: Alianza Editorial.

Sartori, G. (1991) *Teoría de la democracia*. Madrid: Alianza Editorial.

Schumpeter, J. (1972) *Capitalismo, socialismo y democracia*. Buenos Aires: Editorial Folio.

Stolowicz, B. (2003), 'América Latina: estrategias dominantes ante la crisis.' In N. Minsburg, ed., *Los Guardianes del Dinero. Las Políticas del FMI en Argentina*. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma.

Stolowicz, B. (2002) 'El desprestigio de la política: lo que no se discute'. *Política y Cultura*, No.17.

Stolowicz, B. (2001) 'Democracia gobernable: instrumentalismo conservador'. En *Sujetos políticos y alternativas en el actual capitalismo*. Universidad Nacional de Colombia: Bogota.

Stolowicz, B., ed. (1999) *Gobiernos de izquierda en América Latina. El desafío del cambio*. Mexico D.F.: Plaza y Valdés and Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.

World Bank (1990) *Poverty, World Development Report 1990*. Washington D.C.: World Bank.

World Bank (2001) *Attacking Poverty, World Development Report 2000/2001*. Washington D.C: World Bank.

World Bank (2003) 'Debt Relief for Sustainable Development, Statistical Update', April 2003. Washington D.C.: World Bank.



La fuerza electoral ganada por la izquierda es un indicador relevante del momento político nuevo, pero no lo expresa ni lo explica suficientemente, y hasta podría conducir a conclusiones equivocadas. Entre ellas, suponer que la fuerza electoral de la izquierda signifique por sí misma un retroceso absoluto de las fuerzas conservadoras en América Latina. El entusiasmo y las esperanzas que justificadamente motiva este signo de avance de las fuerzas democráticas no puede hacernos perder de vista la complejidad del proceso político en la región.

En la nueva coyuntura, los avances electorales de la izquierda expresan una realidad social y política nueva, definida primordialmente por el ascenso de las luchas populares, por una creciente recomposición de la capacidad de resistencia al neoliberalismo. En ocasiones, llega a manifestarse en levantamientos populares que han podido frenar privatizaciones y otras políticas antipopulares, han hecho caer presidentes y en algunos casos han sido el antecedente inmediato de triunfos electorales. Sin embargo, este panorama amplio y diverso de luchas no siempre tienen una expresión electoral correlativa, y tampoco están necesariamente vinculados a los partidos de izquierda que participan en los procesos electorales.

El accionar político de izquierda es mucho más vasto que la disputa electoral. Pero ésta tiene hoy una gran vitalidad, pues nunca como ahora la izquierda tuvo mayores posibilidades de disputarle gobiernos a la derecha, dado el desprestigio que ésta tiene por la amplitud del rechazo al neoliberalismo. Sin embargo, la probabilidad de convertir esos avances electorales en posibilidades de cambio de la realidad latinoamericana actual no se reduce a tener numerosas representaciones parlamentarias o ganar gobiernos municipales y hasta nacionales. Éstos también dependen de la gestación de una fuerza política suficiente, es decir, de una voluntad colectiva organizada capaz de cambiar las relaciones de poder con las que el capitalismo neoliberal se reproduce en todos los ámbitos de la vida social.

El Transnational Institute (TNI) es una red descentralizada de investigadores, académicos y activistas sociales de países del Sur, Europa y Estados Unidos. Su sede mundial se encuentra en Amsterdam y su objetivo es promover la cooperación internacional para el análisis de, y búsqueda de soluciones a, problemas tales como el militarismo y los conflictos bélicos, la pobreza y la marginalización social y política, y la degradación ambiental.

El New Politics Project (Proyecto Nueva Política) del TNI tiene como objetivo el estímulo del pensamiento político innovador y progresista sobre temas tales como la democracia y la gobernabilidad participativa, las identidades y roles de movimientos sociales, organizaciones comunitarias y partidos políticos de nuevo tipo. El proyecto promueve el desarrollo de alternativas teóricas y prácticas a las visiones tradicionales de la política promovidas por los partidos 'tradicionales' y las agencias ortodoxas de 'desarrollo'. En este sentido, el TNI apoya la producción de conocimiento crítico desde la primera línea de acción política y facilita la traducción, publicación e intercambio de experiencias e ideas entre investigadores y activistas del Norte y del Sur.



La Fundación de Investigaciones Marxistas tiene como objetivo la realización de toda clase de actividades e iniciativas, en el ámbito de la cultura, las artes, las ciencias y la cooperación internacional. Su inspiración fundamental es el marxismo como corriente teórica y política pero procura el debate y el intercambio con todas las demás corrientes críticas de pensamiento. La FIM forma parte de la red europea *Transform!*